



Asamblea General

Distr. general
1 de noviembre de 2017
Español
Original: inglés

Septuagésimo segundo período de sesiones

Tema 54 del programa

Informe del Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados

Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado

Informe del Secretario General

Resumen

El presente informe ha sido preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de conformidad con la resolución 71/97 de la Asamblea General. Proporciona información actualizada sobre las actividades de asentamiento de Israel en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado. También se destacan casos de demoliciones y desalojos forzosos en el contexto de los asentamientos y se incluyen estudios de casos sobre sus repercusiones en las comunidades beduinas y de pastores en la Zona C.



I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 71/97 de la Asamblea General y proporciona información actualizada sobre la aplicación de la resolución durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017. Debe leerse conjuntamente con los informes anteriores del Secretario General a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos sobre los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado¹.

2. En el informe se proporciona información actualizada sobre las actividades de asentamiento en el Territorio Palestino Ocupado y las condiciones que contribuyen a un clima de coacción, incluidos casos de demoliciones y desalojos forzosos, que se describen en los dos ejemplos que afectan a las comunidades beduinas y de pastores. Como se señaló en informes anteriores, los desalojos forzosos constituyen uno de los factores que contribuyen a crear un entorno de coacción². El informe destaca también que las demoliciones y los desalojos forzosos a los que se enfrentan los propios palestinos constituyen graves violaciones de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. Estos hechos constantes siguieron siendo motivo de preocupación en el período sobre el que se informa, al igual que los casos de violencia de los colonos.

II. Antecedentes jurídicos

3. En informes anteriores del Secretario General, incluidos los más recientes, se puede encontrar un análisis del marco jurídico aplicable y la base de las obligaciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y el Golán sirio ocupado (A/HRC/34/38, párrs. 3 a 12 y 18, A/HRC/34/39, párrs. 4 a 9, y A/71/355, párr. 3).

III. Información actualizada sobre los asentamientos

A. Nuevos asentamientos y expansión de los asentamientos

4. Desde 1967, Israel ha establecido unos 250 asentamientos y asentamientos de avanzada en la Ribera Occidental ocupada y en Jerusalén Oriental³. Además de ser una violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario, los asentamientos y los asentamientos de avanzada siguen teniendo serias repercusiones en los derechos humanos de la población palestina. Se ha privado a los palestinos de sus tierras y propiedades, se les ha desalojado por la fuerza y se les ha negado el acceso a servicios esenciales como consecuencia de los asentamientos. También han sido a menudo objeto de actos de violencia, acoso e intimidación por parte de los colonos. En informes anteriores del Secretario General se ha descrito el papel de las autoridades israelíes en la construcción y expansión de los asentamientos, en particular mediante el suministro de terrenos, infraestructura y servicios públicos, junto con otras prestaciones y subsidios concedidos a los colonos⁴.

¹ A/71/355 y A/HRC/34/39, que abarca los primeros meses del período que se examina.

² Véanse A/HRC/34/39, párrs. 45 y 46, A/70/351, párrs. 25 a 51, y A/HRC/15/48, párrs. 20 a 22.

³ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, "The humanitarian impact of de facto settlement expansion: the case of Asfar", *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory* (noviembre de 2016), se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-de-facto-settlement-expansion-case-asfar>; véase también A/70/82, párr. 46.

⁴ Véanse A/68/513, párrs. 23 a 29, A/69/348, párrs. 33 a 35, y A/70/351, párrs. 33 a 36.

5. El Gobierno de Israel planeó inicialmente compensar a los colonos⁵ evacuados del puesto avanzado de Amona⁶ mediante la construcción de viviendas en el asentamiento ilegal de Shvut Rachel East. A pesar de que los residentes de Amona al parecer rechazaron ese ofrecimiento, en febrero de 2017 las autoridades israelíes aprobaron el plan para Shvut Rachel Este, que permitiría la construcción de 98 de las 300 unidades de vivienda previstas. Según la organización no gubernamental israelí Paz Ahora, aunque oficialmente Shvut Rachel Este se considera un “barrio” del asentamiento de Shilo, en realidad es un asentamiento separado porque estará situado aproximadamente a 1 km de la zona edificada de Shilo⁷.

6. El 28 de mayo de 2017, una orden militar del Mando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel definió la jurisdicción de un nuevo asentamiento, Amihai. Es el primer asentamiento nuevo que establecerá el Gobierno de Israel en la Zona C desde 1992⁸. A pesar de la construcción de Shvut Rachel Este, el asentamiento de Amihai también se propuso como compensación para los residentes de Amona. Comprendería 102 unidades de vivienda, mientras que se desalojó a 41 familias del puesto de avanzada de Amona.

7. Según Paz Ahora, durante el período sobre el que se informa se establecieron dos nuevos asentamientos de avanzada: uno en septiembre de 2016, cerca del asentamiento de Mehola, y otro en enero de 2017, cerca del asentamiento de Hemdat⁹.

8. El equipo de tareas para la inspección de las fronteras de las tierras del Estado (equipo de tareas sobre la Línea Azul) de la Administración Civil de Israel¹⁰ prosiguió sus estudios y demarcaciones de tierras del Estado durante el período del que se informa. Sus estudios y decisiones son pasos esenciales en el proceso para avanzar los planes de asentamiento¹¹. En agosto de 2016, el Gobierno de Israel notificó al Tribunal Superior de Justicia sobre su estudio en curso para seleccionar “tierras del Estado” cerca de la localidad de Nahla, al sur de Belén, en la llamada zona “E2”. El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio señaló que ese paso podría facilitar la creación de un nuevo asentamiento, Givat Eitam, en las afueras de Belén, lo que restringiría aún más el desarrollo de esa ciudad y la aislaría, y contribuiría al desmembramiento de la Ribera Occidental¹².

9. Según la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio (OCENU), en marzo de 2017 la Administración Civil de Israel declaró como tierras del Estado unas 10 hectáreas cerca del

⁵ Véase Barak Ravid, “Inside Amona evacuation budget: 70 million shekels to build new settlement”, *Haaretz*, 18 de diciembre de 2016, se puede consultar en <http://www.haaretz.com/israel-news/1.759866>.

⁶ El asentamiento de avanzada de Amona fue evacuado el 1 de febrero de 2017. En diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia dio al Gobierno un plazo de dos años para evacuar Amona, que se construyó ilegalmente en tierras palestinas de propiedad privada.

⁷ Véase Paz Ahora, “Jurisdiction of the new settlement ‘Amihai’ approved”, 30 de mayo de 2017, se puede consultar en <http://peacenow.org.il/en/jurisdiction-new-settlement-amihai-approved>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Aunque se establecen puestos de avanzada sin autorización, se ha documentado el apoyo de las autoridades israelíes en forma de infraestructura y la seguridad. En el momento de redactar el presente informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no pudo confirmar si los dos nuevos puestos de avanzada disponían de ese apoyo.

¹⁰ Véanse A/71/355, párr. 13, y A/HRC/31/43, párr. 21.

¹¹ Véase A/HRC/31/43 párr. 21.

¹² Véase Nickolay Mladenov, Información al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Oriente Medio, 29 de agosto de 2016, se puede consultar en <http://www.un.org/undpa/en/speeches-statements/29082016/middle-east>.

asentamiento de Eli. Sobre la base de su vigilancia de las actividades de asentamiento, algunas organizaciones no gubernamentales han indicado que esta declaración refleja la intención de legalizar de forma retroactiva los asentamientos de avanzada de Palgeyi Maim y Givat Haroeh¹³. A fines de marzo, el equipo de tareas sobre la Línea Azul publicó sus revisiones de la demarcación de tierras del Estado cerca del asentamiento de Shilo. Las autoridades israelíes habían declarado previamente su intención de legalizar el puesto de avanzada cercano de Adei Ad.

B. Construcciones iniciadas, planes y licitaciones

10. La Oficina Central de Estadística de Israel publicó 2.758 construcciones de viviendas iniciadas en los asentamientos de la Zona C de abril de 2016 a marzo de 2017, lo que representa un aumento del 70% en comparación con el período comprendido entre abril de 2015 y fines de marzo de 2016, cuando se registraron 1.619 construcciones iniciadas¹⁴. No se dispone de datos oficiales a disposición del público sobre construcciones iniciadas en asentamientos de Jerusalén Oriental.

11. Según la supervisión efectuada por la OCENU, durante el período sobre el que se informa se presentaron licitaciones para aproximadamente 3.200 unidades de vivienda, la mayoría (2.800) en los primeros cinco meses de 2017. De junio a diciembre de 2016 se emitieron licitaciones para 365 unidades, incluidas 323 en Jerusalén Oriental y 42 en el asentamiento de Qiryat Arba', en la Zona C. Entre las emitidas en el período sobre el que se informa figuraban licitaciones para la construcción en los asentamientos de Har Homa, Giv'at Ze'ev, Ma'ale Adummim y Ari'el.

12. La OCENU también informó de que durante el segundo semestre de 2016, habían avanzado los planes para la construcción de unas 1.500 unidades en la Zona C (220 de los cuales han llegado a la etapa final de aprobación) y de otras 1.500 en Jerusalén Oriental. Durante los primeros seis meses de 2017, se habían avanzado los planes para alrededor de 5.000 unidades de vivienda por conducto de los órganos de planificación israelíes.

C. Legislación

13. La legislatura israelí ha continuado la práctica pasada de promulgar leyes directamente aplicables a la Ribera Occidental, lo que plantea preocupaciones por una "anexión de facto". Durante el período sobre el que se informa esto ha incluido leyes que, por primera vez, amplían la jurisdicción de la Knesset a asuntos relativos a la tierra y la propiedad.

Ley de "regularización"

14. El 8 de febrero de 2017, la Knesset aprobó la Ley de Regularización de los Asentamientos en Judea y Samaria, 5777-2017, denominada ley de "regularización"¹⁵. Autoriza el uso continuado en la Ribera Occidental de tierras

¹³ Véase Paz Ahora, "Israeli cabinet approves new settlement", 31 de marzo de 2017, se puede consultar en <http://peacenow.org.il/en/israeli-cabinet-approves-new-settlement>.

¹⁴ Véase Paz Ahora, "Central Bureau of Statistics: 70 per cent rise in construction of settlements during the past year compared to previous year", 19 de junio de 2017, se puede consultar en <http://peacenow.org.il/en/central-bureau-statistics-70-rise-construction-settlements-past-year-compared-previous-year>.

¹⁵ Véase A/HRC/34/39, párr. 33; véase también Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, "Zeid urges Israel to reconsider bill to legalize outposts that 'clearly and unequivocally violate international law'", se puede consultar en <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21003>.

palestinas de propiedad privada que se han tomado con fines de asentamiento. La ley requiere que la regularización tenga lugar lo antes posible y que la reasignación de tierras palestinas privadas para uso de los asentamientos se complete en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la ley, el 13 de febrero de 2017. Es la primera vez que la Knesset amplía su jurisdicción a cuestiones relativas a la propiedad privada de los palestinos que viven bajo la ocupación militar de Israel. El Fiscal General de Israel se ha opuesto a la ley, que describió como inconstitucional y en violación del Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra)¹⁶.

15. Organizaciones de la sociedad civil israelíes y palestinas han presentado al Tribunal Superior de Justicia dos peticiones contra la ley alegando que violaría el derecho israelí e internacional¹⁷. Sin embargo, el Tribunal ha declarado que las peticiones no retrasarían la aplicación de la ley y que la fecha límite para la reasignación de 13 de febrero de 2018 sigue siendo válida. Si el Tribunal Superior de Justicia no la anula, la ley podría eliminar los obstáculos que impiden la legalización retroactiva de docenas de puestos de avanzada existentes, e Israel reconocería como legales aproximadamente 3.000 unidades de vivienda construidas ilegalmente en asentamientos¹⁸. Con la confiscación de hecho de tierras palestinas de propiedad privada, la ley violaría la obligación de Israel de proteger la propiedad privada en el territorio que ocupa¹⁹. La ley también suscita preocupaciones en cuanto al cumplimiento por Israel, como Potencia ocupante, de su obligación de respetar las leyes vigentes en el territorio que ocupa, salvo impedimento absoluto de hacerlo²⁰.

Proyectos de ley de “anexión” y aplicabilidad de la legislación israelí a la Ribera Occidental

16. Desde la firma de los Acuerdos de Oslo de 1993, miembros de la Knesset han presentado docenas de proyectos de ley privados con el objetivo de anexionarse partes de la Ribera Occidental. Se han presentado para su examen al menos 20 de esos proyectos desde las elecciones de marzo de 2015 (por ejemplo, mediante la aplicación directa de las leyes israelíes a los asentamientos)²¹, pero ninguno ha

¹⁶ Véase “Israel passes controversial law on West Bank settlements”, BBC News, 7 de febrero de 2017, se puede consultar en <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38888649>; véase también Allison Kaplan Sommer, “Explained: Israel’s new Palestinian land-grab law and why it matters”, *Haaretz*, 7 de febrero de 2017, se puede consultar en <http://www.haaretz.com/israel-news/1.770102>.

¹⁷ La primera solicitud fue presentada el 8 de febrero de 2017 por Adalah, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Comité de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén en nombre de 15 consejos locales y dos municipios palestinos (véase <http://mezan.org/en/post/21791>); la segunda solicitud fue presentada el 15 de marzo de 2017 por la Asociación de Derechos Civiles en Israel, Paz Ahora y Yesh Din en nombre de 27 consejos locales palestinos y 13 organizaciones de la sociedad civil israelíes (véase <http://www.acri.org.il/en/2017/03/05/acri-peace-now-and-yesh-din-petition-the-high-court-against-the-expropriation-law/>).

¹⁸ Véase Asociación de Derechos Civiles en Israel, “ACRI, Peace Now and Yesh Din petition the High Court against the expropriation law”, 5 de marzo de 2017, se puede consultar en <http://www.acri.org.il/en/2017/03/05/acri-peace-now-and-yesh-din-petition-the-high-court-against-the-expropriation-law/>.

¹⁹ Véanse Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (Reglamento de La Haya), arts. 46 y 56, Cuarto Convenio de Ginebra, art. 53, y A/HRC/34/38, párrs. 20 y 21.

²⁰ Véase Reglamento de La Haya, art. 43, Cuarto Convenio de Ginebra, art. 63, y A/HRC/34/38, párr. 39.

²¹ La mayoría de los proyectos de ley están dirigidos a la anexión de asentamientos o zonas concretas (por ejemplo, Ma’ale Adummim, Gush Etzion, el valle del Jordán) y algunos a la aplicación de las leyes israelíes de planificación y zonificación a los asentamientos, mientras

llegado a una primera lectura en la Knesset o ha sido respaldado por el Gobierno. Sin embargo, la Knesset actual ha aprobado nuevas leyes expresamente aplicables a los ciudadanos israelíes que viven en los asentamientos. En enero de 2017, el Gobierno estuvo a punto de examinar un proyecto de ley para aplicar las leyes y reglamentos a Ma'ale Adummim (uno de los mayores asentamientos, con 40.000 habitantes), pero finalmente el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, bloqueó su promoción²².

D. Aplicación de la ley sobre la violencia de los colonos

17. En informes anteriores del Secretario General se describió la manera a menudo se producían actos de violencia, allanamiento y daños a la propiedad por parte de los colonos en tierras palestinas en esfuerzos concertados para expulsar por la fuerza a los palestinos a fin de ampliar los asentamientos²³. En los últimos años, las autoridades israelíes han redoblado sus esfuerzos para hacer frente a la violencia de los colonos con medidas de prevención y enjuiciamiento de los autores²⁴. Según datos oficiales, entre enero de 2016 y junio de 2017, se presentaron 54 autos de acusación contra israelíes por delitos por motivos ideológicos²⁵. Además, entre enero y octubre de 2016, las autoridades israelíes emitieron 30 órdenes de alejamiento contra israelíes (incluidos menores) considerados extremistas, que prohibían su presencia en la Ribera Occidental. Al 29 de noviembre de 2016, 11 israelíes estaban sometidos a detención administrativa²⁶.

18. Sin embargo, entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 111 incidentes de violencia de colonos que afectaron a palestinos, 42 de los cuales dieron como resultado heridos y 69 daños materiales. A pesar de una disminución continua desde 2013 (año en que se registraron 397 casos), se produjo un aumento de los incidentes de ese tipo a principios de 2017, así como de ataques contra israelíes, en su mayoría el lanzamiento de piedras por parte de palestinos a vehículos²⁷.

19. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha vigilado y documentado varios casos de violencia de colonos en la zona de Nablus, donde se produjo un porcentaje importante de los incidentes, que refleja ataques recurrentes y organizados de los colonos que cada vez están invadiendo más las aldeas palestinas en esa zona. Algunos ataques se

que otros han sido mucho más amplios en su alcance y efecto y exigen la anexión plena de la Zona C o de todos los principales asentamientos israelíes.

²² Véase Tovah Lazaroff, Jeremy Sharon y Herb Keinon, "Annexation bill put off until after Trump-Netanyahu meeting", *Jerusalem Post*, 22 de enero de 2017, se puede consultar en <http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-looks-to-delay-Maaleh-Adumim-annexation-bill-479191>; véase también Tovah Lazaroff, "Ma'aleh Adumim annexation bill on hold for a week", *Jerusalem Post*, 4 de marzo de 2017, se puede consultar en <http://www.jpost.com/Israel-News/Maaleh-Adumim-annexation-bill-on-hold-for-a-week-483206>.

²³ Véase A/70/351, párrs. 52 a 60.

²⁴ Véase A/HRC/34/39, párr. 20, y S/2016/595, anexo.

²⁵ Véase Ministerio de Justicia de Israel, "Israel's investigation and prosecution of ideologically motivated offences against palestinians in the West Bank" (junio de 2017). En el informe no se separan claramente las investigaciones relativas a los delitos perpetrados por motivos ideológicos contra palestinos o sus propiedades y las investigaciones relativas a otros delitos perpetrados por motivos ideológicos cometidos por israelíes en la Ribera Occidental (por ejemplo, delitos contra el personal de seguridad).

²⁶ *Ibid.* Respecto a la detención administrativa, el Secretario General ha condenado que Israel recurra a ella, tanto contra palestinos como contra israelíes, véanse A/69/347, párr. 29, y A/HRC/31/43, párrs. 40 a 43.

²⁷ Según la Oficina, entre enero y mayo de 2017, 152 incidentes causaron daños a israelíes o sus propiedades, frente a 112 en 2016.

produjeron en presencia de las fuerzas de seguridad israelíes, que no defendieron el orden público y la seguridad en el Territorio Palestino Ocupado ni protegieron a sus habitantes, en particular de todos los actos de violencia, amenazas e insultos²⁸.

20. Por ejemplo, en Arif, la familia de Muneer Hassan Ahmed Suleiman sufrió varios días de ataques violentos de colonos, el más grave el 29 de abril de 2017. Según datos de vigilancia del ACNUDH, unos 60 colonos, entre ellos uno armado con un fusil automático, atacaron las propiedades del Sr. Suleiman, destruyeron automóviles y arrojaron piedras contra la vivienda. Varias piedras alcanzaron al Sr. Suleiman, que fue golpeado con una barra de metal, que causó varias fracturas en las piernas. El Sr. Suleiman señaló que, aunque las fuerzas de seguridad israelíes llegaron al lugar, se negaron a intervenir. Fue hospitalizado durante cuatro días y estaba en una silla de ruedas cuando el ACNUDH se reunió con él en mayo de 2017.

21. El ACNUDH también supervisó y documentó el caso de la familia Amraan, que vive a 400 metros de un puesto avanzado en Burin Este. La familia comunicó ataques casi semanales de colonos en los últimos tres años, y creía que los autores procedían del puesto de avanzada cercano al asentamiento de Har Brakha. El 12 de mayo de 2017, siete colonos armados con hondas al parecer lanzaron piedras a los aldeanos y a la vivienda de la familia en presencia de las fuerzas de seguridad israelíes. Según testigos, estas no intervinieron para detener el ataque ni detuvieron a ningún sospechoso, planteando graves preocupaciones en cuanto a las obligaciones de las autoridades israelíes de garantizar el orden público y la seguridad y proteger a la población en el Territorio Palestino Ocupado.

22. Entre el 22 de abril y el 27 de mayo de 2017, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios documentó cinco incidentes en los que colonos atacaron a palestinos mientras estaban acompañados por miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Se pensó que la mayoría de los ataques procedían del asentamiento de Yitzhar, en la zona de Nablus, un conocido centro de violencia extremista contra los palestinos. En esos casos, muchos de los cuales se documentaron en vídeo, los soldados no intervinieron ni detuvieron a los atacantes. En algunos casos, utilizaron medios de dispersión de multitudes contra los palestinos²⁹.

IV. Demoliciones y desalojos forzados en el contexto de los asentamientos

23. En 2016, las autoridades israelíes demolieron o embargaron 1.093 estructuras de propiedad de palestinos en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, esto provocó el desplazamiento de más de 1.600 palestinos y repercutió negativamente en los medios de vida de más de otros 7.000. El número de demoliciones en 2016 casi se duplicó en comparación con 2015 y fue el más elevado desde 2009, cuando la Oficina comenzó a hacer un seguimiento sistemático de las demoliciones³⁰.

²⁸ Véanse Cuarto Convenio de Ginebra, art. 27, primer párr., Reglamento de La Haya, art. 46, y A/HRC/34/38, párrs. 33 a 37.

²⁹ Véase Rabbis for Human Rights, “Series of incidents where soldiers stand by as Palestinians are attacked”, comunicado de prensa, 6 de junio de 2017, se puede consultar en [http://rhr.org.il/eng/2017/06/series-cases-idf-soldiers-stand-idly-palestinians-attacked-extremists-settlers/](http://rhr.org.il/eng/2017/06/series-cases-idf-soldiers-stand-idly-palestinians-attacked-extremists-settlers/http://rhr.org.il/eng/2017/06/series-cases-idf-soldiers-stand-idly-palestinians-attacked-extremists-settlers/).

³⁰ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Record number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016”, en *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory* (enero de 2017), se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-and-displacements-west-bank-during-2016>.

24. Durante el período que abarca el informe, se embargaron o demolieron 718 estructuras de propiedad palestina, lo que provocó el desplazamiento de 1.122 personas³¹. Dieciocho de esas estructuras estaban situadas en las Zonas A y B. Aunque el número de demoliciones en el período que abarca el informe disminuyó en general, se registró un aumento en enero de 2017, cuando las autoridades israelíes demolieron 140 estructuras, lo que provocó el desplazamiento de unos 240 palestinos. El número de estructuras demolidas fue un 50% superior al promedio mensual de estructuras afectadas en 2016 (91)³².

25. El motivo oficial de esas demoliciones era que las estructuras se construyeron sin permiso; sin embargo, para los palestinos es prácticamente imposible construir legalmente en la mayor parte de la Zona C y Jerusalén Oriental, debido a las políticas de planificación aplicadas por las autoridades israelíes en esas zonas³³. Como se indicó en informes anteriores del Secretario General³⁴ y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el régimen de planificación es discriminatorio e incompatible con los requisitos previstos en el derecho internacional³⁵. Las políticas y los procesos de planificación de Israel en Jerusalén Oriental y la Zona C contravienen el principio de no discriminación en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la vivienda³⁶. Para muchas comunidades palestinas, en particular las comunidades beduinas y de pastores, Israel tampoco garantiza la seguridad de la tenencia, uno de los componentes básicos del derecho a una vivienda adecuada, por lo que una gran proporción de palestinos es vulnerable a desalojos forzosos, amenazas y acoso³⁷.

26. La observación general núm. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define el término “desalojo forzoso” como el hecho de hacer salir a personas, familias o comunidades de los hogares o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Las disposiciones contra la discriminación de los artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales imponen a los Gobiernos la obligación de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación³⁸. Además, el Comité ha señalado que el derribo de viviendas como medida punitiva es incompatible con las normas del

³¹ Datos de la base de datos de demoliciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Territorio Palestino Ocupado.

³² Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Record number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016”.

³³ Véase A/72/565.

³⁴ Véanse A/66/364 y A/HRC/25/38.

³⁵ Véanse A/HRC/31/43 párrs. 18 y 45, A/HRC/25/38, párrs. 11 a 14, y A/HRC/34/38, párr. 25. En 2012, el Comité expresó su preocupación por la política de Israel de planificación discriminatoria e instó al Gobierno a reconsiderar toda la política a fin de garantizar los derechos de los palestinos y los beduinos a la propiedad, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda y el acceso a los recursos naturales (véase CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 25).

³⁶ Véase Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11.

³⁷ El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció, en su observación general núm. 4, que todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. El Comité también afirmó que los Estados deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 4 (1991) relativa al derecho a una vivienda adecuada.

³⁸ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 7 (1997) relativa a los desalojos forzosos.

Pacto³⁹. Por tanto, las demoliciones realizadas por las autoridades israelíes en el contexto de las estructuras de planificación discriminatorias o con fines punitivos son ilegales en virtud del derecho internacional y, por consiguiente, constituyen los desalojos forzosos⁴⁰.

27. El traslado forzoso constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y equivale a un crimen de guerra que puede dar lugar a la responsabilidad penal individual⁴¹. En informes anteriores, el Secretario General determinó que las demoliciones y las amenazas de demoliciones son los principales factores que contribuyen a un clima de coacción en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental⁴², cuando circunstancias específicas pueden hacer que las personas y las comunidades no tengan otra opción que marcharse⁴³. El Secretario General ha expresado anteriormente su preocupación por el hecho de que Israel estaba aumentando la presión sobre los palestinos mediante prácticas y políticas que contribuyen a crear un clima de coacción en zonas controladas plenamente por Israel, lo que impulsa a los palestinos a abandonar sus lugares de residencia⁴⁴. Los siguientes ejemplos y estudios de casos ilustran el modo en que las poblaciones que se enfrentan a demoliciones y los desalojos forzosos pueden ser víctimas de traslado forzoso o correr el riesgo de traslado forzoso.

A. Jerusalén Oriental

28. En Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes han permitido la planificación y zonificación de solo el 13% de la ciudad, en su mayor parte ya construida, para la construcción palestina. Por consiguiente, una tercera parte de los hogares palestinos de Jerusalén Oriental carecen de permisos de construcción expedidos por Israel, lo que coloca al menos a 90.000 residentes en riesgo de desalojo y demolición de sus hogares, con el consiguiente desplazamiento⁴⁵.

29. Según datos proporcionados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios sobre 2016, el 17% de las estructuras demolidas o embargadas (190) en el Territorio Palestino Ocupado estaban en Jerusalén Oriental⁴⁶. Las demoliciones de mayor escala llevadas a cabo durante el período sobre el que se informa incluyó la destrucción de 15 estructuras en la localidad de Qalandia por no tener los permisos de construcción necesarios. Aunque la localidad está situada en la parte de la Ribera Occidental del muro, está comprendida dentro de los límites del municipio de Jerusalén. El aumento del costo de la vivienda en Jerusalén Oriental, en parte debido a la escasez de vivienda, ha llevado a muchas familias palestinas a esas zonas particularmente vulnerables situadas más allá del muro, pero que Israel considera como parte de Jerusalén. Esas zonas tienen poco o ningún acceso a los

³⁹ *Ibid.*, párr. 12.

⁴⁰ En sus observaciones finales de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su profunda preocupación por las demoliciones de viviendas y los desalojos forzosos en la Ribera Occidental, en particular en la Zona C, así como en Jerusalén Oriental, por las autoridades israelíes, el ejército y los colonos (véase E/C.12/ISR/CO/3, para. 26).

⁴¹ Véanse Cuarto Convenio de Ginebra, arts. 49 y 147, y Estatuto de Roma, art. 8 2) b) viii).

⁴² Véase A/HRC/34/39, párr. 47.

⁴³ Véase A/HRC/34/38, párr. 28.

⁴⁴ Véase A/HRC/34/39, párr. 41.

⁴⁵ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Territorio Palestino Ocupado, “East Jerusalem: key humanitarian concerns” (agosto de 2014), se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalem-key-humanitarian-concerns-august-2014>.

⁴⁶ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Record number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016”.

servicios públicos, aunque los residentes pagan impuestos al municipio de Jerusalén⁴⁷.

30. A agosto de 2017, había órdenes de desalojo pendientes contra al menos 180 familias en Jerusalén Oriental (818 personas), incluidas 21 en la Ciudad Vieja de Jerusalén. En la mayoría de los casos, iniciadas por organizaciones de colonos, el objetivo de esas órdenes es controlar las propiedades palestinas ocupadas reivindicando la titularidad antes de 1948 o impugnando el estatus de “arrendatario protegido”⁴⁸ de algunas familias⁴⁸. Además, el desalojo de familias palestinas como resultado de la aplicación de la Ley de Disposiciones Judiciales y Administrativas de 1967⁴⁹ puede considerarse ilícito debido a su carácter inherentemente discriminatorio⁵⁰.

31. En el período del que se informa se produjeron casos importantes relacionados con desalojos forzados resultantes de demoliciones en Jerusalén Oriental. En un caso, el 20 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el arrendamiento protegido de Nora Ghaith y Mustafa Sub Laban terminaría en diez años y podían vivir en su casa en la Ciudad Vieja hasta entonces. Decidió también que, después de diez años, se entregaría la propiedad a Atara Leyoshna, la organización de colonos que viene librando una batalla jurídica desde hace 40 años para desalojar a la familia Sub Laban⁵¹. El Tribunal dictaminó además que los hijos de Nora Ghaith y Mustafa Sub Laban, y sus respectivas familias, no podrían seguir viviendo en la vivienda de Sub Laban, con efecto inmediato⁵². En otro caso, el 15 de septiembre de 2016, la familia Kirresh (seis adultos y dos niños) fue desalojada de su vivienda en la Ciudad Vieja después de que el Tribunal Supremo de Israel

⁴⁷ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Increase in West Bank demolitions during July-August”, en *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory* (agosto de 2016), se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/increase-west-bank-demolitions-during-july-august>. La demolición en la localidad de Qalandia fue también significativa, ya que el municipio de Jerusalén no había aplicado su régimen de concesión de permisos a los edificios situados fuera del muro.

⁴⁸ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “East Jerusalem: Palestinians at risk of eviction”, se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalem-palestinians-risk-eviction>.

⁴⁹ La Ley, promulgada después de la guerra de 1967, transfirió al Administrador General del Ministerio de Justicia de Israel todas las propiedades bajo el control del Custodio Jordano de la Propiedad del Enemigo, que había gestionado los bienes de judíos que huyeron o fueron obligados a abandonar Jerusalén Oriental en 1948, y que se utilizaron principalmente para albergar a refugiados palestinos. Según el artículo 5 b) de la Ley, el Administrador General debe entregar la propiedad a quien fuera su propietario antes de su transferencia al Custodio Jordano, o a una persona que representase al propietario a solicitud de este. En efecto, los judíos o entidades judías pueden recuperar bienes que poseían antes de 1948. Sin embargo, los palestinos que perdieron el control de sus propiedades después de 1948 pueden recuperar sus bienes de los ocupantes actuales en casos muy excepcionales, y solo pueden recibir una compensación muy inferior al valor actual de la propiedad. Esta diferencia de trato hace que la Ley de Disposiciones Judiciales y Administrativas de 1967 sea inherentemente discriminatoria contra los palestinos.

⁵⁰ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 7 (1997) relativa a los desalojos forzosos.

⁵¹ La familia Sub Laban alquiló el apartamento al Custodio Jordano de la Propiedad del Enemigo en 1954, momento en que se le otorgó el estatus de arrendamiento protegido. La familia mantuvo ese estatus y pagaba un alquiler al Custodio General Israelí, que asumió el control de las propiedades administradas por el Custodio Jordano de la Propiedad del Enemigo. A pesar de ese estatus protegido, la familia Sub Laban ha estado amenazada de expulsión desde 1978, primero por el Custodio General y después por Atara Leyoshna.

⁵² Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Palestinian family forcibly evicted from its home in occupied East Jerusalem”, 15 de septiembre de 2016, se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/palestinian-family-forcibly-evicted-its-home-occupied-east-jerusalem>.

rechazase su apelación. La familia había estado alquilando la propiedad desde el decenio de 1930, y se le ordenó que la transfiriera a Ateret Cohanim, una organización de colonos israelíes que afirmó que había adquirido la propiedad en 1980. En agosto de 2016 se desalojó a otras tres familias palestinas (siete adultos y diez niños) de sus hogares en la Ciudad Vieja.

B. Zona C

32. Solo el 30% de la Zona C está disponible para el uso y edificación de palestinos después de la asignación de tierras para los asentamientos y su expansión, la demarcación de zonas militares de acceso restringido y la apropiación de terrenos para la construcción del muro. Sin embargo, la Administración Civil de Israel ha permitido la construcción en solo el 0,4% de los terrenos⁵³. Según estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, teniendo en cuenta la población de palestinos y de colonos, la superficie planificada por colono israelí es más de 13 veces mayor que la superficie planificada por palestino en la Zona C⁵⁴.

33. La planificación de las localidades palestinas supone la demarcación de la zona de construcción existente en una localidad con poco o ningún margen de crecimiento, y sin la participación de la población local en la elaboración y el proceso de adopción de decisiones⁵⁵. Desde 2011, la Autoridad Palestina ha prestado apoyo a las comunidades locales en la presentación de planes de ordenación para que los apruebe la Administración Civil de Israel. En total, se han preparado 110 planes de ordenación comunitaria para unos 148.000 palestinos. Al 31 de mayo de 2017, la Administración Civil de Israel había aprobado cinco de esos planes, 96 estaban pendientes de aprobación y decisión final de la Administración Civil de Israel y nueve todavía no se habían presentado para su examen.

34. Según la Administración Civil de Israel, a fines de 2016 había unas 12.500 órdenes de demolición pendientes contra estructuras de propiedad de palestinos en la Zona C por carecer de los permisos pertinentes⁵⁶. Más de 2.900 de estas órdenes estaban en suspenso debido a apelaciones presentadas ante la Administración o tribunales israelíes⁵⁷. Como las órdenes no tienen fecha de vencimiento, pueden ser ejecutadas en cualquier momento, lo que coloca a los palestinos y las familias afectadas en una situación muy precaria. En 2016, la Administración emitió órdenes de detener los trabajos, órdenes de demolición o advertencias relacionadas con más de 100 estructuras de asistencia humanitaria financiadas por donantes⁵⁸.

⁵³ Véase Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, “‘One UN’ approach to spatial planning in ‘Area C’ of the occupied West Bank” (septiembre de 2015), se puede consultar en <https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/10/One-UN-Approach-to-Spatial-Planning-in-Area-C-.pdf>.

⁵⁴ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Under threat: demolition orders in Area C of the West Bank” (septiembre de 2015), se puede consultar en [http://data.ochaopt.org/demolitionorders/demolition orders in area c of the west bank en.pdf](http://data.ochaopt.org/demolitionorders/demolition%20orders%20in%20area%20c%20of%20the%20west%20bank%20en.pdf), pág. 13.

⁵⁵ Véase Nir Shalev y Alon Cohen-Lifshitz, *The Prohibited Zone: Israeli Planning Policy In Palestinian Villages in Area C* (Bimkom, 2008).

⁵⁶ Algunas de esas órdenes se emitieron en el decenio de 1980. Aproximadamente el 77% de las órdenes de demolición emitidas por la Administración Civil de Israel desde 1988 se refieren a estructuras situadas en terrenos que las autoridades israelíes reconocían como tierras palestinas de propiedad privada, mientras que el 23% restante se refieren a estructuras construidas en terrenos clasificados como tierras estatales; véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Under threat: demolition orders in Area C of the West Bank”.

⁵⁷ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Record number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016”.

⁵⁸ *Ibid.*

35. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, más del 63% de las estructuras confiscadas por la Administración Civil de Israel en la zona C en 2016 se encontraban en comunidades de pastores palestinos o beduinas, incluidas 283 estructuras proporcionadas por la comunidad internacional como asistencia humanitaria⁵⁹. Como destacó el Coordinador de las Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria y las Actividades para el Desarrollo para el Territorio Palestino Ocupado, la mayoría de las demoliciones en la Ribera Occidental tienen lugar sobre la base del falso fundamento jurídico de que los palestinos no poseen permisos de construcción, pero, en la Zona C, las cifras oficiales israelíes indican que únicamente se aprueba el 1,5% de las solicitudes de permisos de palestinos. Por tanto, ¿qué opciones jurídicas quedan para un palestino que respete la ley?⁶⁰

36. Los siguientes estudios de casos documentan los desalojos forzosos a que se enfrentaron algunas comunidades beduinas y de pastores en la Zona C durante el período sobre el que se informa. En informes anteriores del Secretario General se señalaron varios factores que contribuyen a la creación de un entorno de coacción en la Zona C, entre ellos los planes de desalojar y reubicar a comunidades beduinas y de pastores⁶¹, así como las demoliciones, o amenaza de demoliciones, relacionadas con la aplicación del régimen de planificación ilegal y discriminatorio⁶².

Estudio de caso 1: comunidad de Kurshan-Khan al-Ahmar en la periferia de Jerusalén

37. La comunidad beduina de Kurshan Jahalin forma parte del grupo de comunidades Khan al-Ahmar, situado al este del asentamiento de Mishor Adumim. Al igual que todas las comunidades beduinas de la periferia de Jerusalén, Kurshan-Khan al-Ahmar corre el riesgo de traslado forzoso debido a los planes de reubicación y expansión de los asentamientos israelíes, y otros factores que contribuyen a crear un entorno de coacción, como se detalla a continuación. Kurshan es una de las comunidades beduinas más pequeñas, con una población de 54 residentes compuesta por nueve familias Abu Dahuk⁶³.

38. Como otras comunidades beduinas de la periferia de Jerusalén, Kurshan se encuentra en medio de los planes de expansión de Ma'ale Adummim. Esa comunidad ha sufrido demoliciones desde mediados del decenio de 1990⁶⁴. La falta de títulos de propiedad y su situación, casi adyacente a una zona militar de acceso restringido, plantea graves limitaciones para la planificación de la comunidad. Como resultado, no se pueden obtener los permisos de construcción necesarios. Los residentes de Kurshan no están conectados a la red eléctrica o al sistema de alcantarillado y reciben agua mediante conexiones privadas. Los niños que viven en Kurshan asisten a una escuela primaria en la vecina localidad de Abu Al-Hilw.

39. En julio de 2011, la Administración Civil de Israel anunció planes de reubicar a las comunidades beduinas de la periferia de Jerusalén, el valle del Jordán y las colinas al sur de Hebrón⁶⁵. Para justificar el traslado, la Administración invocó la ausencia de derechos a la tierra y de permisos de construcción de viviendas y otras

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Véase Amira Hass, "Israel dramatically ramping up demolitions of Palestinian homes in West Bank", *Haaretz*, 21 de febrero de 2016, se puede consultar en <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.704391>.

⁶¹ Véanse [A/HRC/31/43](#), párrs. 50 a 60, y [A/HRC/24/30](#), párrs. 28 y 29.

⁶² Véanse [A/68/513](#), párr. 30 a 34, [A/HRC/25/38](#), párrs. 11 a 20, [A/HRC/31/43](#), párrs. 44 y 46, [A/HRC/28/80](#), párr. 24, y [A/69/348](#), párr. 13.

⁶³ Véase <http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/jahalin/al%20kurshan.htm>.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Véase [A/67/372](#) párr. 36.

estructuras⁶⁶. En el período sobre el que se informa, la Administración demolió 30 estructuras, incluidas 11 viviendas, el 9 de octubre de 2016. Nueve familias integradas por 47 personas, entre ellas 26 niños, fueron desalojadas por la fuerza y quedaron sin hogar. Más de la tercera parte de las estructuras demolidas se construyeron como parte de un proyecto financiado por donantes consistente en ocho estructuras residenciales y cinco letrinas. El 14 de octubre de 2016, las autoridades israelíes confiscaron las tiendas de emergencia proporcionadas por los donantes al día siguiente de la demolición.

40. Según la comunidad de Kurshan, durante dos meses después del desalojo forzoso se vio en la zona a miembros de una organización de colonos, aparentemente para supervisar la situación. Una delegación de la Administración Civil de Israel visitó la comunidad y aconsejó a los residentes que se trasladasen a Al Yabal o Nuweima, en la Zona C. A fines de mayo de 2017, seis meses después de la demolición, la Administración había impedido que se prestase asistencia humanitaria a la comunidad, incluidos albergues temporales. El ACNUDH observó que, si bien la mayoría de las familias desalojadas por la fuerza había reconstruido refugios improvisados con los escombros de sus viviendas demolidas, estaban lejos de ser adecuados.

Estudio de caso 2 – Khirbat Tana

41. Las zonas de tiro para adiestramiento militar abarcan grandes extensiones de tierra en la Ribera Occidental: alrededor del 17,5% de la superficie total de la Ribera Occidental y el 29% de la Zona C⁶⁷. En esas zonas también viven unas 6.200 personas de 38 comunidades palestinas. Los residentes de las zonas de tiro suelen carecer de acceso a servicios esenciales como el agua, el saneamiento y la atención médica. Además, a menudo se enfrentan a la violencia de los colonos, hostigamiento y confiscación de bienes por entrar en la zona sin el permiso necesario de la Administración Civil de Israel⁶⁸.

42. Una de esas localidades es Khirbat Tana, situada en la Zona C, al norte del valle del Jordán. Alberga a alrededor de 250 personas, que viven en estructuras permanentes y temporales, tiendas de campaña y viejas cuevas, y cuyos medios de subsistencia consisten en el pastoreo de ovejas y ganado, la agricultura y tareas de agricultura de temporada. Viven vidas seminómadas, pasan parte del año en Khirbat Tana y la otra parte en la localidad cercana de Bayt Furik.

43. La Administración Civil de Israel no reconoce que Khirbat Tana sea una localidad, y por tanto, se ha negado a considerarla en la planificación general y también prohíbe la construcción en la zona⁶⁹. Esta prohibición ha provocado demoliciones periódicas de viviendas, establos e instalaciones de almacenamiento de agua, así como la destrucción de una escuela primaria.

⁶⁶ Véase B'Tslem, "Civil administration plans to expel tens of thousands of Bedouins from Area C", 7 de octubre de 2013, se puede consultar en

http://www.btselem.org/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins.

⁶⁷ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, "Wide-scale demolitions in Khirbat Tana", 4 de marzo de 2016, se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/third-large-scale-demolition-khirbet-tana-2016>; véase también Kerem Navot, "A locked garden: declaration of closed areas in the west bank" (marzo de 2015), se puede consultar en <http://www.keremnavot.org/a-locked-garden>.

⁶⁸ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Territorio Palestino Ocupado, "The humanitarian impact of Israeli-declared 'firing zones' in the West Bank", ficha descriptiva (agosto de 2012), se puede consultar en https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf.

⁶⁹ Véase Noga Kadman, *Acting the Landlord: Israel's Policy in Area C, the West Bank* (Jerusalén, B'Tselem, junio de 2013).

44. El 3 de enero de 2017, la Administración Civil de Israel demolió 49 estructuras en Khirbat Tana, incluidas 13 estructuras residenciales, 9 retretes portátiles y 26 estructuras utilizadas con fines agrícolas. Treinta de las estructuras demolidas estaban financiadas por donantes. En consecuencia, 50 personas quedaron sin hogar, incluidos 22 niños. Durante esta campaña de demolición, la Administración también emitió una orden de detener los trabajos de la reconstrucción que se estaba haciendo en la escuela local financiada por la Unión Europea, que había sido demolida en 2011 y de nuevo en 2016⁷⁰.

45. Las recientes demoliciones y desalojos forzosos siguieron una ola que comenzó en julio de 2005 cuando la Administración Civil de Israel demolió casi todos los edificios de la localidad y bloqueó la entrada a las cuevas que algunos de los habitantes habían utilizado como hogares. Entre 2009 y 2011 tuvieron lugar otras cinco rondas de desalojos forzosos⁷¹. La Administración también llevó a cabo cuatro rondas de demoliciones entre febrero y abril de 2016⁷². Una mujer de Khirbat Tana contó al ACNUDH que se había enfrentado a la demolición de viviendas unas 12 veces en su vida.

46. El Ministro de Defensa de Israel afirmó que la ubicación de los habitantes en una zona de tiro suponía un peligro para sus vidas⁷³. En sus respuestas a peticiones contra las órdenes de demolición ante los tribunales, el Gobierno de Israel afirmó que la construcción de viviendas en el lugar había comenzado a fines del decenio de 1990, mucho después de que la zona fuera declarada zona de tiro, y que la mayoría de los residentes estaban utilizando las estructuras residenciales y de otro tipo con carácter estacional y disponían de residencias en la localidad cercana de Bayt Furik⁷⁴. Sin embargo, reconoció la presencia de una mezquita del período otomano en el lugar⁷⁵, lo que apoyaba las afirmaciones de algunos residentes de Khirbat Tana de que la comunidad existía mucho antes de la designación de la zona como zona de tiro.

47. En general, además de las cuestiones sobre la legalidad de la confiscación y destrucción de propiedad privada y de los desalojos forzosos que siguieron a la declaración de zona de tiro⁷⁶, se teme que algunas tierras tomadas por los militares

⁷⁰ Véase Amira Hass, “First Week of 2017: Israel demolishes homes of 151 Palestinians, almost four times last year’s average”, *Haaretz*, 7 de enero de 2017, se puede consultar en <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.763331>.

⁷¹ En marzo de 2011, la Administración Civil de Israel demolió 42 estructuras de la localidad, entre ellas una escuela primaria y cisternas de agua. También bloqueó la entrada a ocho cuevas utilizadas como residencias y albergues para el ganado. Este desalojo forzoso dejó sin hogar a 152 residentes (incluidos 64 niños). Véase B’Tselem “The village of Khirbet Tana” 17 de abril de 2016, se puede consultar en http://www.btselem.org/jordan_valley/tana; véase también See Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian Territory, “Third large-scale demolition in Khirbet Tana in 2016”, 21 de marzo de 2016, se puede consultar en “Wide-scale demolitions in Khirbet Tana”.

⁷² Véase A/71/355, párr. 22.

⁷³ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Territorio Palestino Ocupado, “Third large-scale demolition in Khirbet Tana in 2016”, 21 de marzo de 2016, se puede consultar en <https://www.ochaopt.org/content/third-large-scale-demolition-khirbet-tana-2016>.

⁷⁴ Véase B’Tselem, “The village of Khirbet Tana”.

⁷⁵ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “United Nations Humanitarian Coordinator visits Palestinian community of Khirbet Tana and warns of risk of forcible transfer”, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2016, se puede consultar en https://www.ochaopt.org/documents/hc_statement_demolitions.khirbet%20tana_english.pdf.

⁷⁶ Si bien el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra permite la evacuación temporal de personas protegidas por su propia seguridad o por razones militares imperiosas, los desalojos forzosos para establecer zonas de tiro con fines de capacitación no se ajustan a ese umbral y plantean preocupaciones de posibles traslados forzosos; véase Michael Bothe, “Expert opinion: limits of the right of expropriation (requisition) and of movement restrictions in occupied

israelíes y cerradas para crear zonas de tiro se utilicen para una futura expansión de los asentamientos. Los casos de transferencia de tierras de las zonas de tiro a los asentamientos no hacen sino reforzar esta preocupación⁷⁷. Un estudio de una organización no gubernamental sobre la base de observaciones y entrevistas sobre el terreno llegó a la conclusión de que casi el 80% de las tierras de la zona de tiro para fines de capacitación (alrededor de la mitad de la superficie total de zonas de tiro) no se utilizaba para esos fines⁷⁸.

48. También existe la preocupación de que, en algunos casos, las zonas de tiro puedan utilizarse para la expansión de asentamientos agrícolas⁷⁹. Respecto a la zona de tiro 904a, la que se encuentra en Khirbat Tana, los colonos están utilizando aproximadamente 755 dunums (75,5 hectáreas) de tierras para fines agrícolas⁸⁰. Además, también hay dos asentamientos de avanzada (Gidonim 777 y Havat Binyamin) dentro de la zona. Aunque también se han dictado órdenes de demolición contra esos puestos de avanzada, solo se han aplicado algunas de las órdenes. Cabe destacar que en 2012, el equipo de tareas sobre la Línea Azul reclasificó uno de esos puestos como tierras del Estado, aparentemente con la intención de ampliar los asentamientos⁸¹.

Efectos de los desalojos forzosos en los derechos humanos

49. Los efectos de las demoliciones y los desalojos forzosos en las comunidades de Kurshan y Khirbat Tana no son únicos, pero ilustran la experiencia de otras comunidades en situaciones similares en la Zona C. Los desalojos forzosos resultantes de las demoliciones, que se describen en los casos anteriores, constituyen una violación manifiesta de los derechos humanos⁸², incluidos los derechos a una vivienda adecuada, el agua, el saneamiento, la salud, la educación y la privacidad.

50. El efecto más directo de las demoliciones de viviendas es la falta de hogar, en violación del derecho a una vivienda adecuada protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien las organizaciones humanitarias prestan ayuda a las familias desalojadas por la fuerza, incluido material para la reconstrucción de sus hogares, la asistencia puede tardar varias semanas en llegar a la familia afectada. Mientras tanto, las víctimas no tienen más opción que vivir en viviendas improvisadas rudimentarias e inadecuadas o con

territory”, 2 de agosto de 2012, se puede consultar en <http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2013/01/Michael-Bothe-918-position.pdf>; véase también Akevot, “Firing zone 918: a 1967 legal opinion presented to the high court”, 11 de enero de 2017, se puede consultar en <http://akevot.org.il/en/article/firing-zone-918-case-1967-legal-opinion-presented-high-court/?full>.

⁷⁷ Por ejemplo, en enero de 2015, el Oficial General del Comando Central firmó una orden por la que se redujo la zona de tiro 912 para dar paso a la construcción de viviendas como parte de los planes de expansión de asentamiento de Ma’ale Adummim. Del mismo modo, en 2011, se transfirieron más de 900 dunums (90 hectáreas) de tierras de la zona de tiro 203 para establecer la zona industrial de Sha’ar Shomron para prestar servicio a los asentamientos de Oranit y Elkanah. Véase Chaim Levinson, “IDF cancels status of firing zone to enable expansion of nearby settlement”, *Haaretz*, 8 de marzo de 2015, se puede consultar en <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.645771>; véase también Kerem Navot, “A locked garden: declaration of closed areas in the West Bank”.

⁷⁸ Véase Kerem Navot, “A locked garden: declaration of closed areas in the West Bank”.

⁷⁹ Según el estudio de Kerem Navot, en 2015, unos 14.480 dunums (1.448 hectáreas) de tierras agrícolas cultivadas por israelíes se encontraban en zonas militares de acceso restringido, incluido casi un 20% de tierras situadas en zonas de tiro.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Third large-scale demolition in Khirbet Tana in 2016”.

⁸² Véase Comisión de Derechos Humanos, resolución 1993/77.

parientes o vecinos. Residentes de Khirbat Tana contaron al ACNUDH que, aunque muchos de ellos habían intentado reconstruir sus viviendas utilizando material de las viviendas demolidas, a menudo la Administración Civil de Israel arrancaba las tiendas y las enterraba en los escombros para evitar que se reutilizaran.

51. En Kurshan, los residentes describieron al ACNUDH que las fuerzas de seguridad y de miembros de la Administración Civil de Israel los vigilaron durante varias semanas después del desalojo forzoso. Según ellos, las autoridades israelíes vigilaban todos los movimientos dentro y fuera de la comunidad para que no se trajera material de construcción para la reconstrucción. A fin de impedir nuevas confiscaciones, el material de asistencia que ha recibido la comunidad se ha almacenado en Jericó tras la confiscación de las tiendas proporcionadas por representantes de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina a las familias afectadas. Por tanto, las familias desalojadas han tenido que vivir hacinadas con familiares cuyos hogares no fueron destruidos. Un hombre se refirió a la dificultad de tener que llevar a su mujer y sus tres hijos a vivir con la familia de su hermano, de seis personas, durante más de dos meses. Al 31 de mayo de 2017, más de ocho meses después de los desalojos forzosos, casi todas las personas afectadas vivían en viviendas improvisadas sumamente inadecuadas construidas con material dañado de sus hogares anteriores, mientras que una familia seguía viviendo con familiares.

52. La demolición de retretes y baños se suma a las dificultades a que se enfrentan las comunidades después de una demolición de viviendas. Dos mujeres comunicaron al ACNUDH la dificultad y la falta de privacidad a que se enfrentaban las mujeres y las niñas en comunidades desalojadas por la fuerza, ya que se veían obligadas a utilizar el espacio abierto en torno a sus comunidades.

53. Los desalojos forzosos y el posterior cierre de la zona por las autoridades israelíes han planteado un grave riesgo para la salud de algunas de las personas afectadas. Dos mujeres de Kurshan, cuya vivienda fue demolida en octubre de 2016, habrían tenido que atravesar un terreno accidentado, de 2 a 3 km de la aldea, a fin de llegar a un centro médico para dar a luz a sus hijos porque las autoridades israelíes no permitían que ningún vehículo entrara en la comunidad. Otra mujer, que estaba embarazada y resultó herida mientras trataba de salvar sus pertenencias, también tuvo que caminar para recibir asistencia médica.

54. En el contexto de las demoliciones realizadas en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental en 2016, la organización no gubernamental Médicos del Mundo destacó que no había duda de que la actual ola de demoliciones estaba provocando efectos psicosociales negativos en las comunidades afectadas, a corto, mediano y largo plazo⁸³. Varias personas entrevistadas por el ACNUDH describieron el temor y el estrés que habían sufrido como consecuencia de las demoliciones.

55. Las demoliciones de viviendas y los desalojos forzosos pueden tener una repercusión especialmente profunda y duradera en los niños. Los residentes contaron al ACNUDH el temor que las demoliciones habían causado en los niños, y algunos de ellos no pudieron dormir por la noche durante una semana después de la demolición. En Kurshan, un residente dijo que después de la demolición, sus hijos de entre 2 y 12 años habían comenzado a tener miedo de los extraños y se alarmaban cuando veían que un vehículo se acercaba a la comunidad.

56. Las autoridades israelíes también han demolido centros comunitarios y escuelas en las comunidades mencionadas. Por ejemplo, en un caso investigado por el ACNUDH, la demolición del centro comunitario en Khirbat Umm al Khayr

⁸³ Véase Emilian Tapia, "Demolishing mental health: The 2016 wave of demolitions in the West Bank and East Jerusalem and its impact on the Palestinian population's mental health" (Médicos del Mundo, 2017).

(provincia de Hebrón), que también servía de escuela primaria, afectó a 35 niños. En Khirbat Tana, la demolición de la escuela hizo que los niños tuvieran que trasladarse temporalmente a una escuela situada a 15 km, en Bayt Furik, para continuar su educación. Durante ese período, estuvieron separados de sus familias durante la semana.

57. Las pérdidas ocasionadas por las demoliciones (incluidos los establos) y los desalojos forzosos en las comunidades beduinas y de pastores han repercutido también en los medios de vida de las familias afectadas y aumentado sus gastos. Las mujeres se refirieron a la destrucción de materiales, que aumentó su carga financiera, en particular porque la Administración Civil de Israel no da tiempo suficiente para retirar las pertenencias antes de la demolición. Dos mujeres contaron al ACNUDH que personal de la Administración Civil había retirado sus camas y otras pertenencias grandes de sus hogares pero que durante las demoliciones se destruyeron todos sus utensilios de cocina y provisiones como cereales, azúcar y aceite. Otra mujer en Khirbat Tana informó de que una de sus principales responsabilidades durante las demoliciones, a las que se había enfrentado entre 10 y 12 veces, era salvar el queso que producía para la venta.

58. Los desalojos forzosos aumentaron todavía más los patrones de pobreza, que a menudo afectan directamente a los derechos a la salud, la alimentación y la educación. Según un estudio sobre las comunidades beduinas y de pastores en la Zona C, realizado por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre 2010 y 2016, hubo un aumento general de la proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria del 55% al 61%, y una disminución de la proporción de hogares con seguridad alimentaria del 20% al 6%⁸⁴.

V. Asentamientos en el Golán sirio ocupado

59. En el período sobre el que se informa continuó la expansión de los asentamientos ilegales y la apropiación de tierras por el Gobierno de Israel en el Golán sirio ocupado, en violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. El Secretario General reafirma la validez continua de la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo determinó que la decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al Golán sirio ocupado era nula y sin validez y no tenía efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional⁸⁵.

60. En los 34 asentamientos ilegales israelíes en el Golán sirio ocupado viven aproximadamente 23.000 colonos israelíes, que cuentan con el apoyo del Gobierno de Israel mediante incentivos financieros. Los asentamientos también se benefician de una asignación de recursos naturales desproporcionadamente mayor, como agua potable, que la que se asigna a los residentes sirios⁸⁶. En octubre de 2016, al parecer, el Gobierno de Israel aprobó la construcción de 1.600 nuevas viviendas en el asentamiento israelí de Katzrin⁸⁷. Los residentes sirios del Golán, cuyo número se calcula en alrededor de 25.000, viven en cinco localidades que se enfrentan a

⁸⁴ Véase OOPS y PMA, “Food security among Bedouins and herding communities in Area C” (2016).

⁸⁵ Véase A/71/355, párr. 66.

⁸⁶ Véanse A/HRC/28/44, párr. 54, y A/HRC/31/43, párr. 64.

⁸⁷ Véase http://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-okays-1600-new-homes-in-golan-heights/.

importantes problemas en materia de crecimiento y desarrollo, en parte debido a las restricciones en el acceso a la tierra y los recursos⁸⁸.

61. Las políticas discriminatorias relativas a la tierra, la vivienda y el desarrollo establecidas por las autoridades israelíes han hecho que para los sirios sea casi imposible obtener permisos de construcción. Por consiguiente, las localidades sirias en el Golán sirio ocupado están cada vez más superpobladas, con una infraestructura sobrecargada y escasez de recursos⁸⁹. Al parecer, las autoridades israelíes llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en el Golán sirio ocupado el 7 de septiembre de 2016 en la localidad de Majdal Shams, argumentando que se habían construido sin el permiso correspondiente⁹⁰. La organización de derechos humanos Al-Marsad, con sede en el Golán sirio ocupado, informó de que varios propietarios de viviendas sirios habían recibido avisos de demolición, y expresó su preocupación por la posibilidad de que Israel instituyera una política sistemática de demolición de viviendas en el Golán sirio ocupado⁹¹.

VI. Conclusiones

62. Como se señaló en informes anteriores del Secretario General, la construcción y ampliación de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez jurídica y constituye una violación flagrante del derecho internacional. Los asentamientos y su expansión constante han afectado negativamente los derechos humanos de los palestinos, dando lugar a desalojos forzosos, la pérdida de propiedades y medios de vida y restricciones al acceso a los servicios.

63. A través de la apropiación de tierras palestinas, los asentamientos han fragmentado la Ribera Occidental⁹², así como el apoyo a los asentamientos de avanzada, la declaración de tierras del Estado, las zonas cerradas⁹³, las zonas de tiro con fines de capacitación, las reservas naturales y parques nacionales y las tierras de estudio⁹⁴. Como se indica en el presente informe, muchos de esos procesos han seguido avanzando de forma constante.

64. Además, en gran parte de la Zona C y Jerusalén Oriental, diversas medidas adoptadas por las autoridades israelíes han seguido fortaleciendo un entorno de coacción. Puede equivaler a traslados forzosos, en violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos⁹⁵.

65. Los desalojos forzosos como consecuencia de las demoliciones no solo son una violación del derecho a una vivienda adecuada, y un factor clave en la creación de un entorno de coacción, sino que también afectan negativamente a

⁸⁸ Véase Al-Marsad, "Fifty years of the occupation in Syrian Golan", 8 de junio de 2017, se puede consultar en <http://golan-marsad.org/50-years-of-the-occupation-of-the-syrian-golan/>.

⁸⁹ Véase Al-Marsad, "Israeli authorities demolish home in the Occupied Syrian Golan", 8 de septiembre de 2016, se puede consultar en <http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/>.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Véanse [A/HRC/31/43](#), [A/HRC/22/63](#), [A/70/351](#), y resolución 25/28 del Consejo de Derechos Humanos.

⁹³ Las zonas de división son zonas situadas entre la línea verde y el muro.

⁹⁴ Las tierras de estudio son zonas no registradas cuya situación esté siendo examinada por las autoridades israelíes con miras a retenerlas como propiedad del Gobierno para que el Estado pueda utilizarlas.

⁹⁵ Véanse [A/HRC/34/39](#), párr. 42, Cuarto Convenio de Ginebra, arts. 49 y 147, y norma 129 del derecho internacional consuetudinario.

una amplia gama de derechos humanos. Esos efectos negativos incluyen las restricciones a la circulación, incluidos regímenes estrictos de residencia, sobre todo en Jerusalén Oriental, y la denegación de acceso a servicios esenciales como el agua y el saneamiento⁹⁶.

66. Las actividades de asentamiento son incompatibles con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Forman parte central de una serie de violaciones de los derechos humanos y las necesidades humanitarias en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y además, constituyen uno de los principales obstáculos para un Estado palestino viable.

VII. Recomendaciones

67. Sobre la base del presente informe, el Secretario General recomienda que las autoridades israelíes:

a) Apliquen todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellas la resolución **2334 (2016)** del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo, entre otras cosas, exhorta a Israel a que cese toda actividad de asentamiento, y la resolución **497 (1981)** del Consejo;

b) Detengan y reviertan toda la construcción de asentamientos y las actividades conexas en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado, en particular mediante la discontinuación del apoyo a las iniciativas de las organizaciones privadas de colonos destinadas a incautarse de bienes de palestinos y a desalojar por la fuerza a sus residentes;

c) Pongan fin de inmediato a los desalojos forzados y cesen toda actividad que pueda contribuir a crear un entorno de coacción o conlleven el riesgo de traslado forzoso;

d) Dejen de adoptar cualquier iniciativa para reubicar a las comunidades en la Zona C, en contravención del derecho internacional, en particular las comunidades beduinas y de pastores;

e) Revisen las leyes y políticas de planificación para garantizar que se ajusten a las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;

f) Adopten todas las medidas necesarias para asegurar que a los palestinos en Jerusalén Oriental y la Zona C de la Ribera Occidental ocupada no se les niegue el acceso a servicios básicos, como la electricidad, el agua y el saneamiento y los recursos naturales, incluida la tierra para fines agrícolas.

⁹⁶ Véase [A/HRC/34/39](#), párrs. 40 a 57.